

Realidad Nacional

No. 18 Febrero, 2009



ELECCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

¿Un nuevo camino al pasado?

El 2009 se presenta como un año muy complejo; escenario de un conflicto de poderes donde aún no están claros ni los liderazgos, ni las apuestas concretas y definitivas para los próximos cuatro años de los sectores más influyentes del país.

La reciente elección de la Corte Suprema de Justicia dio la pauta al respecto. Cada "poder fáctico" deseaba tener, al menos, un magistrado o magistrado que "apadrinar" y como "sólo" son quince, la disputa fue encarnizada y capaz de todo.

En la práctica no hubo la tal división de poderes o el respeto a la jurisdicción de cada uno de ellos. El presidente Zelaya y su círculo de ministros más cercanos pretendieron imponer sus propios candidatos o candidata, Micheletti los suyos y hasta algunos de los magistrados salientes intentaron quedarse.

Se afirma, en diferentes círculos de opinión pública y en los medios de comunicación, que el país estuvo al borde de la ruptura del orden institucional y que estuvo listo al gabinete de gobierno en caso de que el Congreso Nacional no consensuara la elección.

La irresponsabilidad fue tal en el tratamiento de los asuntos del Estado que incluso en la intentona fueron involucradas las Fuerzas Armadas, cuya alta jerarquía, la militar, no la civil, rechazó acompañar cualquier aventura, y hasta el propio embajador de EEUU, Hugo Llorenz, intervino para decir que su país estaba en contra de cualquier ruptura.

El estimulado resurgimiento del protagonismo militar por invitación directa de los liberales es uno de esos hechos cuyas repercusiones se valoran con el tiempo; no en lo inmediato.

Al final la decisión retornó al Congreso Nacional donde, a regañadientes por parte de los liberales, se respetó la nómina de 45 candidatos propuestos por la Junta Nominadora, lo que era reclamado por una amplia red de ciudadanía que exigía el respeto al procedimiento del mecanismo de selección, aunque los nombres previstos en la nómina no daban por sentado la imposibilidad de cambio al interior de la CSJ. Su presencia en los bajos del Palacio Legislativo recordó, por momentos, los días de la huelga de hambre de los fiscales, con un reclamo similar: "queremos autoridades que rompan con la impunidad y la politización partidarista".

Casi a medianoche, la nómina se terminó respetando, luego de un acuerdo entre liberales y nacionalistas, pero ello no anticipa un giro sustancial en el máximo tribunal de justicia; lo que ratificó es la conformación de un Estado corporativo empresarial más poderoso aún que los políticos.

Algunos analistas expresan que detrás de cada bufete de los elegidos hay grandes clientes. Se trata de banqueros, inversionistas y familias de larga tradición política; sin embargo, pese al escepticismo, los magistrados estaban entre los nominados, así que el formalismo -a secas- se cumplió.





Ahora el punto es ¿cómo se resolverán los conflictos de intereses de los nuevos integrantes de la Corte o dilucidar quiénes vigilarán esa situación? Para ambas preguntas la respuesta todavía es: no se sabe. Sin duda, una de las principales lecciones aprendidas de la Corte que acaba de finalizar es que a los magistrados (as) no se les puede dejar sin auditoría o fiscalización social.

El pleno que encabezó la abogada Vilma Morales había sido nombrado después de un proceso de selección que había contado con la más alta participación en la historia de la administración de justicia del país, pero esa participación, sobre todo ciudadana, desapareció después de nominar a los candidatos (as).

No hubo ya seguimiento o monitoreo ciudadano del desempeño de los magistrados. Las organizaciones sociales parecieron conformarse con su papel nominador y se dedicaron a sus múltiples actividades cotidianas.

Lo que resultó es que al dejarles las manos libres a los magistrados (as), éstas terminaron atadas.

Con las nuevas reglas se esperaba un cambio no sólo en el procedimiento de propuesta de los magistrados, sino en su comportamiento al frente del Poder Judicial. Hubo expectativas adicionales por el hecho de que la Corte tenía mayoría de magistradas (9 de 15).

En el balance global de su gestión, los resultados son más decepcionantes que alentadores, y no es cuestión de que la Corte no tuvo capacidad para divulgar lo que hizo; simple y llanamente los grandes desafíos quedaron inconclusos y no logró tener el valor y la claridad suficiente para cambiar el fierro que les dejó el ex diplomático norteamericano Crescencio Arcos: "en Honduras la justicia sólo muerde a los descalzos".

La reforma del Poder Judicial avanzó poco, y en algunos momentos se estancó o retrocedió, como en los polémicos fallos políticos-electorales de 2008, entre ellos el caso-Micheletti (que le permitió aspirar a la nominación presidencial) y el caso-Elvin Santos (relacionado con la figura del Vicepresidente y/o Designados Presidenciales).

La mayoría de la población percibió en esas decisiones no sólo la abierta intromisión de otros poderes, sino que conjeturó con un trasfondo de negociación. Al final, no hubo "reelección" de ninguno de los magistrados o magistradas. Ese fue un "voto de castigo" por la decepción sufrida.

De Justicia en el mundo de la injusticia

Fragmento de un artículo escrito por el Dr. Juan Almendarez y divulgado el 4 de Febrero de 2009.

En el marco de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ocurría algo terrible y monstruoso, el asesinato de tres jóvenes: Jeffry Edmundo Tróchez (veinte años), Nahún Escobar Bonilla (21 años) y Rodrigo Eugenio Valladares Pineda (25 años), hijo del Ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman) Abogado Leo Valladares Lanza y la profesora Sra. Daisy Pineda Madrid. Los cuerpos asesinados, el lugar donde se encontraban y la forma como fueron ejecutados indican que los realizaron los torturadores y criminales que actúan con toda impunidad; porque nunca son identificados como responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. Mientras el dolor desgarraba el corazón de las familias, y asistíamos al sepelio del hijo de la familia Valladares; y las otras familias dolientes enterraban a sus hijos el 25 de enero 2009 "Día de la Mujer Hondureña"; el Congreso Nacional de la República procedía a elegir, según la ley, a los quince magistrados de la Corte Suprema de la Justicia.

Después de las acostumbradas deliberaciones de los sectores del poder en lugares oscuros e inaccesibles para el pueblo; decidieron dar orden a sus respectivos representantes del Congreso, sobre las personas que debían elegir. Sin embargo en un acto de injusticia, se excluyó para que no fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia, al Abogado Leo Valladares, candidato a magistrado por la sociedad civil; persona honorable, ética, defensora de los derechos humanos, con prestigio en el foro nacional e internacional. En igual forma fue excluida Clarisa Vega; quien ha luchado éticamente contra los abusos de las empresas mineras y también fue excluido el académico Dr. Ramón Romero. La algarabía de la elección de los magistrados opacaba la situación de sufrimiento y el terror que generan las ejecuciones sumarias; forma de torturar colectivamente e intimidar a los y las defensoras de los derechos humanos y a toda la comunidad hondureña... En Honduras la elección de la Corte Suprema de Justicia será transparente cuando exista justicia social, ambiental y cuando tengamos una verdadera democracia. ...

Concluidos siete años, que no es poco tiempo, todavía es una aspiración la plena vigencia del Consejo de la Judicatura o el respeto a la Carrera Judicial. Quizá se modernizó algo la infraestructura judicial, pero no progresó en su esencia.

La herencia para la nueva Corte es un sistema de justicia que no alcanzó la transparencia debida, con una agenda pendiente que incluye:

- a) Lograr eficiencia y credibilidad en el sistema de justicia
- b) Ampliar la seguridad jurídica
- c) Un verdadero acceso de la ciudadanía a la justicia.
- d) Una complementariedad eficiente con el resto del sistema de operadores de justicia.

Todo el proceso de nominación y elección de los nuevos magistrados ratificó que los problemas estructurales del sistema de justicia persisten y que la autonomía de la Corte Suprema de Justicia se mantiene como una aspiración vital para la democracia hondureña.

La autonomía o independencia debe manifestarse en la inamovilidad de los buenos jueces, la fiscalización y sanción de los malos jueces, y la fortaleza que tenga para adoptar decisiones sin injerencias extrañas externas o sin presiones de los superiores jerárquicos.

El sistema en su conjunto carece de una capacidad administrativa efectiva, tiene una defensoría pública muy débil y la politización se mantiene casi inalterable. De hecho, otra vez, en la nueva elección, imperó el 8 contra 7. Lo único que varía es la mayoría según el partido gobernante, lo que cuenta es el historial de afiliación partidaria

Logros como la implementación del nuevo Código Procesal Penal resultaron limitados por la falta de consolidación de un modelo de justicia eficiente y efectivo. La introducción de elementos y técnicas novedosas para nuestro medio, como los juicios orales, pudo reducir la mora judicial pero eso no basta. No todo se trata de la productividad de los jueces, sino de la calidad de sus sentencias y la diversidad de sus sentenciados. Hasta ahora, por ejemplo, ningún corrupto de alto cuello ha sido condenado por llevarse al bolsillo los dineros públicos que debieran destinarse a obras de beneficio social, crecimiento económico o en general de desarrollo nacional.

Las famosas "cartas de libertad" otorgadas a ex funcionarios representan un baño de desprestigio inmenso para el Poder Judicial.

Libertad definitiva para Rafael Callejas

Como "piezas de museo" quedaron los requerimientos fiscales interpuestos contra el ex presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas. La anterior Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó en firme entre octubre y noviembre pasado las cartas de libertad concedidas a favor del ex mandatario por los casos del "Petrolazo", "Chinazo" y "Ciudad Mateo", entre otros.

El rechazo a los recursos de casación provocó la indignación de la Fiscalía contra la Corrupción, quien se queja que el Poder Judicial no les dio la oportunidad de presentar las pruebas que sustentan las acusaciones.

"Creo que es de felicitar a los magistrados que adoptaron estas resoluciones porque cumplieron bien el mandato por el cual fueron electos, de resolverle el problema a uno de los líderes de un partido que tenía mayoría en la Corte Suprema de Justicia", expresó el fiscal Milson Salgado.

"Esto es paradójico, es irónico", añadió. En el proceso penal interno ya no hay ninguna alternativa procesal que se le pueda dar a estos casos, solo en el ámbito internacional. "Simplemente quedarán como casos históricos en donde los ciudadanos del futuro puedan ver cómo nuestras generaciones no se comprometieron con los intereses del país, sino con los intereses de una persona particular", criticó el fiscal.

La Fiscalía fue persistente en presentar recursos que les permitieran presentar las pruebas en un juicio con el fin de deducir responsabilidades por presuntos actos de corrupción.

"Los casos simplemente quedan como 'piezas de museo' para que las generaciones del futuro puedan apreciar cómo se manejaba la justicia en Honduras", lamentó el fiscal. (El Heraldo, 3 de febrero, 2009)



Cuando se intenta caracterizar qué sistema judicial queda, la respuesta sigue siendo un conjunto de instituciones que trabajan la justicia de manera débil y sin la debida coordinación, afectadas por la politización partidaria, corrupción e impunidad.

La inseguridad jurídica, evidente en las pasadas elecciones primarias, es una realidad que no se puede

negar, lo que debilita las bases de la confianza e integridad nacional.

Parte de esa debilidad es que la justicia opera de forma selectiva; persigue cierto tipo de delitos y otros no; encarcela a unos y deja impunes a otros.

El brazo de la justicia no llega, por ejemplo, a delitos como la quiebra fraudulenta de instituciones financieras, robo de fondos públicos, abusos de poder y lavado de dólares.

El principio fundamental de igualdad ante la ley existe en el papel, pero no en la práctica y atenta contra la construcción de ciudadanía.

También afecta, por supuesto, cualquier esfuerzo por avanzar tras las metas del crecimiento económico y el desarrollo social.

Si en una sociedad el poder no se somete a la ley, entonces no existen las reglas para la inversión y el trabajo honesto.

La vida sin seguridad jurídica, dice la teoría del Derecho, se convierte en algo lleno de sobresaltos, imprevisible, peligroso y paralizador.

La justicia según la Constitución de la República

El Artículo 1 de la Constitución de la República establece que: "Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social".

Ese no es el único artículo constitucional relativo a este tema, veamos:

ARTÍCULO 59.- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.

ARTÍCULO 60.- Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.

ARTÍCULO 61.- La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

ARTÍCULO 63.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.

ARTÍCULO 64.- No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.

ARTÍCULO 68.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

ARTÍCULO 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

ARTÍCULO 82.- El derecho de defensa es inviolable;

ARTÍCULO 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.

Efectivamente, el Poder Judicial en Honduras, en las circunstancias históricas por las que atraviesa el país, tiene que asumir de manera definitiva su carácter de poder, es decir, su independencia, para influir de manera importante en el desarrollo nacional. Un Poder Judicial independiente es vital para asegurar que los Poderes Legislativo y Ejecutivo asuman su plena responsabilidad ante la ley, así como para interpretar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución de la República.

Para cumplir con su labor, el nuevo Poder Judicial debe aprovechar que hay:

- Una conciencia pública creciente de que los políticos deben sacar sus manos de la justicia.
- El respaldo de algunos jueces del Poder Judicial que si están convencidos de la necesidad de que haya eficiencia y honestidad en el sistema.
- Un empoderamiento mayor entre la ciudadanía de sus derechos y deberes.
- La urgencia de mejorar los mecanismos de justicia para combatir la delincuencia común y la de "cuello blanco".
- El acompañamiento de los organismos internacionales de financiamiento y cooperación que entienden que las reformas macroeconómicas no serán exitosas en tanto permanezca rezagada la administración de justicia.

Nada bueno podría lograrse si el Poder Judicial es dependiente o supeditado a los intereses, apetitos o ambiciones de las fuerzas políticas y económicas dominantes. La independencia externa del Poder Judicial – con respecto a otros poderes – resulta fundamental para una sana administración de la justicia.

Un juez que no tiene la posibilidad real de decidir libremente un fallo dentro del marco de juridicidad carece de independencia y siempre pondrá en entredicho la validez de sus decisiones.

Aún falta mucho por hacer para mejorar efectivamente el sistema judicial, sobre todo el acceso de los pobres al mismo, y eso no se logrará sin una participación ciudadana beligerante y sin una lucha que garantice el acceso a la justicia como una conquista y no como un regalo de nadie.

HONDURAS

Una puesta al día que preocupa



Honduras atraviesa un ciclo de creciente inestabilidad interna, con un debilitamiento de la institucionalidad pública, asociada a una campaña electoral con visos de ilegalidad y fraudulenta, incremento de las demandas sociales y conflictos de grupos de poder que impiden al país impulsar reformas de fondo o lograr los consensos mínimos necesarios para afrontar las repercusiones a nivel nacional de la crisis mundial del neoliberalismo.

El tema económico y social es central, con tendencias cada vez de mayor riesgo, pero la agenda nacional la domina la disputa política-electoral y la retórica *temperamental*- del Presidente Zelaya, dentro de la cual se incluye el reciente incremento al salario mínimo; justo desde la perspectiva social, pero improvisado e inconexo en lo económico.

Este aspecto ha provocado una confrontación que es alimentada por la parte gubernamental entre el empresariado y los trabajadores que al final agrava la crisis interna derivada de la recesión mundial.

Para el 2009 el gobierno decidió mantener su política social basada en subsidios, en autorizar aumentos salariales y en contener la devaluación de la moneda nacional ante el dólar, resistiendo presiones de algunos sectores nacionales e internacionales.

En términos generales esa política tiene aspectos correctos; el problema es que responden más al cálculo "populista" y al estado de ánimo del Presidente Zelaya que a una estrategia de gobierno. Tanto es así que, de nuevo, hasta el final de su mandato es que vuelve a

mencionarse el tal "proyecto de Nación", igual que ocurrió en otras administraciones.

Bajo esa circunstancia, la sostenibilidad de esa política es incierta puesto que se mantiene, básicamente, a partir de dos variables: las remesas que envían los emigrantes y los bajos precios de los combustibles en el mercado internacional.

Ambas variables son volátiles; de hecho, mientras las remesas tienden a disminuir su crecimiento; el petróleo busca subir de precio.

Ante ese cuadro, este año la inflación seguirá superando los dos dígitos (+10%) persistirá el creciente déficit en la cuenta corriente externa y se incrementarán las presiones que sufre las reservas internacionales netas del Banco Central.

Algunos indicadores

Ingreso de divisas: El flujo de remesas dejó de crecer al ritmo experimentado durante los años anteriores, asimismo el precio de varios productos de exportación (café, banano, sorgo) tienden a la baja, por lo cual la balanza de pagos tendrá una merma y por lo tanto se debe esperar una disminución de las reservas internacionales, con lo cual el país tendrá dificultades para mantener el ritmo de las importaciones. Si al final del primer trimestre de 2009 se acentúa el déficit comercial y merman las reservas internacionales puede generarse una devaluación en el tipo de cambio.

Inversión: La Cámara de la Industria de Construcción dio a conocer que debido al aumento del salario mínimo los costos de construcción se han elevado en un 20%, también se ha elevado el costo de la inversión pública, con lo cuál sólo queda preguntar si el gobierno dispondrá de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de inversión social de la población.

Deuda Interna: El gobierno ha señalado que la inversión pública para el 2009 será de 14 mil 500 millones de lempiras, en el marco de un presupuesto general que se calcula en más de 111 mil millones de lempiras. Al no contar con los recursos necesarios para esta inversión (se prevé una caída en los ingresos fiscales) el gobierno al no contar tampoco con una fluidez de recursos externos (porque no existe un acuerdo con el FMI), deberá recurrir al endeudamiento interno. FOSDEH calcula que la deuda interna del país supera los 35 mil millones de lempiras.

En el plano social, la percepción en la mayoría de la población es "pesimista"; muy pocos se apuntan al criterio gubernamental de que la situación está mejorando. La vida es cada vez más difícil de sobrellevar para la mayoría de las familias, como lo constatan los resultados de la última Encuesta de Hogares.

Todo hace indicar que hay un repunte del desempleo abierto y, por consiguiente, del subempleo; que sigue siendo el fenómeno más extendido en la economía nacional. Un subempleo desprovisto de cualquier garantía social y de solidez a futuro. Su "auge" es, como afirma el dicho popular, "para pasar el agua".

Los indicadores económicos y sociales apuntan más a la incertidumbre, que a la confianza. De hecho, el aumento unilateral decretado por el Presidente Zelaya al salario mínimo lo que hace es reconocer oficialmente que el precio de la canasta básica anda por arriba de los seis mil lempiras, y que durante años lo que ha existido es complicidad entre los empresarios, los dirigentes sindicales y las autoridades para pagar muy por debajo de la necesidad real.

Lo paradójico es que el mismo gobierno Zelaya que autoriza ese incremento – presentado en público casi como una conquista *revolucionaria* – aprobó, en enero de 2007, un acuerdo de regionalización salarial que autoriza a las empresas maquiladoras a pagar en los próximos diez años 28 lempiras menos del salario mínimo – el anterior, de 3,500 lempiras, no el actual – en cinco de los departamentos con más altas tasas de pobreza (Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara y Valle). Es decir, que donde hay más pobreza se pague menos por la fuerza de trabajo. El beneficio se hace extensivo a partir de la excepción del pago del nuevo salario mínimo al mismo sector maquilador.

Algunas empresas ya se están moviendo a la zona sur precisamente por los bajos costos, lo que representa una competencia inhumana entre las regiones por atraer los inversionistas.

De hecho, la necesidad de los (las) hondureños por un trabajo les obliga aceptar condiciones de explotación laboral extrema.

En perspectiva los índices de pobreza pueden aumentar de forma considerable en el corto plazo si se eleva el desempleo y el los precios de los alimentos. Esa es ya una realidad puesto que miles de hogares de la denominada *clase media* se han empobrecido en los últimos dos años, sin que formalmente reciban ayuda de la Red Solidaria.



Más pobreza

De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, otros 53 millones de personas podrían quedar sumidas en la pobreza debido a la desaceleración del crecimiento económico en todo el mundo. Además, se anticipa un duro golpe a los esfuerzos por reducir la mortalidad infantil, ya que podrían morir entre 200.000 y 400.000 bebés más cada año hasta 2015 si persiste la crisis.

El presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, estará presente en las reuniones y ha instado a los países en desarrollo a destinar un 0,7% de sus paquetes de reactivación económica a un Fondo contra la vulnerabilidad, de carácter especial, para los países en desarrollo.

"Mientras que gran parte del mundo pone el acento en rescates de bancos y paquetes de reactivación económica, nosotros no debemos olvidar que los habitantes pobres de países en desarrollo corren muchos más riesgos cuando sus economías tambalean", dijo Zoellick.

Alrededor de 40 países son "muy vulnerables", entre ellos Honduras, debido a las elevadas tasas de pobreza preexistentes y las previsiones de desaceleración del crecimiento.

De acuerdo con la nueva nota sobre política, titulada "The Global Economic Crisis: Assessing Vulnerability with a Poverty Lens" (La crisis económica mundial: Evaluación de la vulnerabilidad bajo la lente de la pobreza), millones de personas que ya viven por debajo de la línea de pobreza "quedarán aún más sumidas en la necesidad" debido a la crisis financiera mundial.

Prácticamente un tercio (29%) del total de países en desarrollo está "muy expuesto" a los efectos que produce la crisis en los niveles de pobreza. Un 62% de ellos está moderadamente expuesto y se enfrenta a la desaceleración del crecimiento o a una pobreza elevada. Menos de un décima parte está poco expuesta, según el BM.

Bajo esas circunstancias, la crisis alimentaria es un desafío grave en el país. La esperanza de cada año es que el clima favorezca a la producción en el agro; que las lluvias bendigan la tierra y la hagan florecer. El año anterior, por mucho bono tecnológico invertido, el exceso de lluvias acabó malogrando la cosecha de frijoles; así que todo es incierto en la materia.

De lo que no cabe duda es que el país arrastra un déficit severo en la producción de granos básicos, especialmente de frijoles, cuyo precio se encuentra por arriba de los 80 lempiras, la medida, lo que indudablemente será un indicativo de los muchos hondureños y hondureñas que pasarán hambre.

No extraña que la permanente crisis económica hondureña (alzas en alimentos, transporte y servicios públicos) y la creciente inseguridad obligue a miles de compatriotas a emigrar hacia Estados Unidos y Europa con el fin de obtener un empleo que les permita sostener a sus familias. Debido a ese sacrificio, Honduras

recibe anualmente más de 2,800 millones de dólares por concepto de remesas (90% proceden de Estados Unidos), pero aunque la suma es impresionante, el costo negativo a corto y largo plazo es muy alto. Ninguna nación progresa exportando/expulsando sus recursos humanos de la manera en que lo hace Honduras. En el 2008 unos 50 mil compatriotas fueron deportados vía aérea de EEUU y 70.000 vía terrestre desde México y Guatemala. La tendencia de este año es similar e incluso podría agravarse por la recesión de la economía de Estados Unidos.

Para paliar los efectos de la inseguridad alimentaria y del éxodo humano, se reclama en Honduras un mayor apoyo interno y externo (incluyendo los fondos de Petrocaribe) a los programas que se orienten a la reducción de la pobreza, formación calificada de mano de obra y dotación de infraestructura.

Sin embargo, el énfasis de la política anunciada con esos recursos es asistencialista, sobre todo después de que Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) fue reducida a discursos, papeles y recuerdos.

¿Qué hacer? En lo inmediato se trata de ajustar prioridades a partir de la involución de los principales indicadores económicos y sociales, tomando en cuenta lo que resta de la actual administración, y en el largo plazo el punto es disponer de una visión que permita a los gobiernos y socios del país impulsar políticas públicas de fondo y sostenibles con un enfoque estratégico social acertado. Claro está; todo eso es viable sin corrupción y con una amplia participación ciudadana. De lo contrario, la historia seguirá siendo la misma.



Carta a mi amigo Machado

Conozco a Francisco Machado desde hace muchos años, tantos y de tantas vivencias que nuestra amistad resiste cualquier prueba de las que pone la vida en el camino. Sé de su procedencia; en un rincón del departamento de Lempira. Conozco también a su familia, a la que le ha resultado imposible mantener al margen de su ajetreo social puesto que entregarse a la defensa de los derechos sociales exige, como cuota de sangre, reducir el ámbito de sus derechos individuales.

No es sencillo para una esposa o para los hijos o hijas resignarse a que el tiempo completo de su esposo o padre se lo dedique a otros y otras; y que, de paso, se tenga que convivir con el temor de que cuando anda fuera le pase algo. Machado ha podido enfrentar esa situación porque su paz interior no es una paz egoísta, sino solidaria. Fundamentalmente, Machado es un buen hombre, un hombre de Dios y esa ha sido su coraza ante tantas amenazas que le han disparado quienes se oponen a sus luchas. Eso le ha valido para no caer en provocaciones terribles.

Machado no es un pleitista callejero, sino un activista social; su pleito ha sido con las transnacionales mineras, con los taladores de bosques, con los que arrebatan las tierras a los indígenas, con los abogados que tarifican su conciencia, con los vendidos que arrían con facilidad las banderas de la dignidad...por eso Machado y su familia se encuentran hoy fuera de Honduras; en una condición a la que me resisto llamarle exilio, porque Machado no es de los que contemplan los toros desde la barrera. A Machado no lo han doblado por dentro los enemigos de la democracia y la convivencia.

El extrañamiento de la patria es una condición muy dura, plagada de sacrificios e incomprensiones. Machado lo sabe y si tomó la decisión de irse temporalmente es porque las amenazas lo valían. En este país desde que se devaluó la vida, los sicarios abundan. Existen poderosos intereses que tienen en la mirilla a los opuestos a tanta arbitrariedad, abuso y desigualdades. Ante las amenazas e intimidaciones no hay un Estado capaz de defender al ciudadano; el ciudadano queda a solas con sus enemigos y sus decisiones. Machado tomó una decisión de la que en su momento divulgará los detalles.

Hoy, desde el FOSDEH, de cuya Junta Directiva Machado ha sido Presidente, protestamos por lo que le ha ocurrido y exigimos las garantías constitucionales mínimas que garanticen su vida y de su familia. Seguros estamos que vendrán tiempos mejores, que la impunidad cederá y que Machado continuará estando entre nosotros, peleando –como siempre- ante las injusticias.

Hasta entonces

Mauricio Díaz Burdett – Coordinador del FOSDEH.

¿PLAN DE 30 AÑOS?

El país de los procesos inconclusos



A pocos meses de que finalice la actual administración pública y en el contexto de un Presidencialismo exacerbado, se vuelve a mencionar el tema de un Plan de País, con una propuesta ya elaborada por una comisión del Poder Ejecutivo y otra por hacerse, a cargo de una comisión nombrada por el Congreso Nacional.

No hace falta tener facultades de oráculo para entender que el próximo gobierno o gobernante, como siempre, ignorará el legado del anterior y le dará por comenzar de cero, barriendo los empleados públicos del otro partido para colocar los propios y dirigiendo los destinos nacionales conforme los compromisos que haya adquirido con los grupos de poder que respaldaron sus ambiciones políticas.

Si algo caracteriza al estado hondureño es ser un país de "proyectitis" tos y procesos inconclusos o a destiempo. El origen de la deuda externa está ligado, precisamente, al empréstito contratado para construir un ferrocarril interoceánico, del que apenas se tendieron unos cuantos kilómetros de rieles. El dinero se esfumó en la corrupción, parte se gastó en suntuosas fiestas europeas para celebrar el préstamo, otra terminó en cuentas privadas, mientras que el pueblo tardó casi 80 años en cancelar la deuda. Esa historia no fue un hecho circunstancial, sino que marcó un grave precedente.

Sin duda, a este país para quererlo hay que verlo con el corazón, no con la razón porque hay tantas razones para luchar por él, como para abandonarlo. Aquí ser valiente en la defensa de sus intereses se paga muy caro porque muchos se venden por menos que nada y quienes no se venden arriesgan sus vidas o son obligados a exiliarse.

Cuando hoy la globalización y "ahora la globalización de la crisis" replantea el futuro de las naciones, lo primero que salta a la mente es la duda de si Honduras tiene largo plazo. El riesgo de país es más alto ahora que a fines del siglo XIX que fue marcado

con el arribo del capital bananero y minero. Samuel Zemurray era un samaritano comparado con los grandes barones del actual capital, nacional y transnacional, que imponen sus propias "leyes" a cambio de empleos precarios, como ocurre en las maquilas.

Ahora tenemos un escenario histórico nuevo, la crisis del modelo neoliberal, al que asistimos con viejas deudas no cumplidas y sin que las elites de poder atiendan las propuestas de cambio que llegan desde la ciudadanía y del mundo.

Los campesinos, por ejemplo, han lanzado varias iniciativas para reemplazar la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola (la de Callejas, 1992), pero nadie les hace caso, son asesinados o desalojados de forma inhumana.

Crear nuevas normas para actualizarnos implica asumir cambios económicos, sociales y políticos que afrontan resistencias muy fuertes y agresivas. La experiencia del FOSDEH confirma que los esfuerzos por cambiar las normas y reglas excluyentes e ineficientes chocan con barreras más sólidas que el hormigón. La resistencia es brutal ante las iniciativas que reivindican los llamados bienes públicos globales, como el acceso a la justicia, al medio ambiente, al trabajo y salario digno, a la equidad, la diversidad, la tolerancia, la democracia...

Poderosos intereses están concentrando, en lugar de distribuir, los bienes más rentables del estado: la energía eléctrica, la telefonía, el agua, los bosques, los minerales, las playas, la mano de obra...en fin, los bienes comunes. Eso está en el trasfondo de las luchas electorales partidarias (y al interior de los mismos partidos) que azotan al país y que finalmente provocan el desvío de fondos públicos bajo el argumento de fortalecer la democracia.

Las asimetrías que han caracterizado el sistema económico y social de Honduras en lugar de disminuir, se ensanchan. ¿Así que es válido plantear si puede pensarse en un largo plazo persistiendo la inequidad abismal que nos caracteriza? Esa inequidad es el *continuismo* que en opinión del FOSDEH más debe preocuparnos.

Mientras toda posible solución a la crisis convoca al consenso, las políticas que se aplican empujan al disenso, a la dispersión y la expulsión. Los grandes éxodos migratorios hacia el "norte", así lo explican, originando cuadros hasta hace poco tiempo inimaginables, como las remesas familiares sosteniendo la economía nacional. Los que viajan indocumentados, los que no pueden encontrar trabajo adecuado en su tierra, son los responsables de mantener a flote esta economía de servicios y de la que se sirven los grupos de poder político y económico.

Al respecto, los políticos no se preguntan ni proponen qué hacer para que los hondureños en lugar de salir, se queden; al contrario, su esfuerzo es para que el éxodo no se detenga porque las remesas vuelven millonarios a los mismos responsables de la crisis.



El objetivo oficial es sostener esa masa de migrantes en el exterior, siendo el principal aspecto de nuestra política exterior la extensión del TPS. Con todo lo que conlleva de costos adicionales para el migrante, tanto para el proceso burocrático con el gobierno de EEUU como los cobros ilegales de nuestro servicio exterior.

El modelo actual de poder, como está delineado, engulle de todo, desde los derechos de la ciudadanía hasta la soberanía nacional.

Quienes, como en el FOSDEH, nos oponemos a pensar que todo está perdido, planteamos otra mirada para concebir al desarrollo, destacando que no es sólo el crecimiento económico, ni es sólo la llegada de capitales externos lo que asegura el bienestar.

Todos los involucrados, desde los partidos políticos hasta los organismos financieros internacionales, pasando por las agencias de cooperación, deben entender que el saldo actual del modelo económico y social es más pobreza y desigualdad, y por esa vía la desprotección de las redes sociales y productivas es casi total en Honduras.

La pobreza absoluta está creciendo, no disminuyendo, como lo prueban, incluso, las cifras oficiales más recientes, no obstante los ajustes metodológicos para minimizar la realidad. El enorme y desigual alcance de las condiciones sociales y económicas está reflejado en muchos documentos, y no se requieren más inversiones costosas para corroborarlo. Si bien es cierto ha habido algunas mejoras sociales, el número de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día es denigrante. La pobreza, además, no sólo aumenta sino que se diversifica. En las áreas rurales es mayor que en las urbanas y cada día vuelve víctimas a más y más mujeres, al grado que 66% de los hogares que encabezan tienen dificultades para su manutención. Las expectativas de que tras los sacrificios macroeconómicos vendría la estabilidad y el bienestar resultaron falsas, al menos para la mayoría de la población.

En el FOSDEH estamos convencidos que el sistema

político, económico y social hondureño está regido por asimetrías que lo condenan a la inviabilidad como nación. No nos imaginamos que la milagrosa declaración de buenos propósitos, sin reformas verdaderas, podría dar estabilidad a una nación inestable.

El proceso electoral, considerado una vía democrática, no podrá encontrar una respuesta solidaria a los problemas de Honduras si persisten las mismas fórmulas y los mismos interlocutores. La falta de resultados concretos, una y otra vez, debe pesar en la conciencia de alguien y motivar los cambios esperados. Esta sociedad ha diversificado sus sujetos de diálogo e incidencia, y negar esa realidad es esconder la cabeza en la arena.

Si algo resume la Honduras constitucional es que nunca en tan corto tiempo la democracia formal había avanzado tanto, pero nunca en el mismo período había retrocedido con tanta velocidad. La esperanza de vida subió a 67 años, pero la esperanza de vida sana no pasa de 55 años. La mayoría de los hondureños cada vez está más lejos de disfrutar de una vida larga y saludable, de recibir una buena educación y tener un nivel de vida digno. Con la inseguridad actual, nadie tiene seguro volver a casa después de haber cerrado la puerta. Estamos perdiendo mucho de los que habíamos ganado y eso es más que preocupante.

Estamos de acuerdo en abogar por una visión que a partir de atender las demandas inmediatas, no pierda de vista el largo plazo, pero no creemos en los *planes de país inventados o afiebrados por los políticos*. Los retos se acumulan peligrosamente, entre ellos el fenómeno de la desruralización que vivimos de forma acelerada y el empobrecimiento de las capas medias.

En apenas siete ciudades se está concentrando más del 50% de la población y el listado de pueblos semi abandonados o en manos de adultos mayores se multiplica, lo que evidencia la desarticulación estructural del país. Los tres grandes ejes que debieran impulsar su crecimiento: el agro, la industria y el sector financiero

están desvinculados entre sí. La crisis del agro es profunda, sin que la estructura productiva industrial entre al relevo, menos ahora que enfrenta no sólo la crisis internacional sino que también la confrontación con medidas populistas que en lugar de incentivarla la debilita. Honduras se está transformando en una plataforma de servicios (maquiladora y de remesas), sin bases sólidas.

En ese contexto la especulación monetaria y financiera tiende a concentrar millones y millones de lempiras y dólares en poderes fácticos pequeños y poderosos que controlan bancos, medios de comunicación y la política. No hay duda que la riqueza más ostentosa se abre paso entre la precariedad social colectiva.

En ese marco resalta lo que siempre hemos sabido, que somos los propios hondureños quienes, en primera y última instancia, debemos hacernos responsables de salir adelante. Para ello es fundamental un pacto de nación que ofrezca soluciones sostenibles y reales a desafíos actuales, sin perder de vista el largo plazo. Un pacto no para crear nuevos objetivos, sino para cumplir los que ya tenemos, y a los que no se hace caso.

La propuesta del FOSDEH

A partir de la experiencia ganada FOSDEH ha presentado su propuesta "Lineamientos para la Transformación Nacional LTN" que presenta un modelo de política y estrategia para el desarrollo nacional sostenible que toma como elementos básicos la realidad, problemática, potencialidades y expectativas de los segmentos de población y geográfico de las regiones en la definición de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y presupuestos de desarrollo nacional y local.

El LTN adopta el enfoque de gestión territorial regional para la planificación, presupuesto (fondos comunes regionales) y administración coordinada, articulada y complementaria multisectorial entre el Sector Público, Sociedad Civil y la Cooperación.

El proceso incluye concertar las organizaciones de sociedad civil, con los actores municipales y de la producción (empresarios) para establecer redes de encadenamiento productivo y de servicios que sí mejoren o cambien las condiciones de vida de las comunidades.

Acaban de pasar las elecciones primarias y estamos a las puertas de las elecciones generales, pero la fe en la democracia se está perdiendo y las consecuencias de esa tendencia son amenazadoras. La población demanda que entre la democracia formal y la democracia real haya coherencia.

El FOSDEH desea que el proceso electoral en el cual el país está embarcado no se distraiga en titulares sensacionalistas, ni que sea de nuevo un escenario de retórica demagógica sobre la justicia y la lucha contra la pobreza. Nuestra esperanza es que el debate electoral pueda marcar un cambio de rumbo y nos vuelva a todos conscientes de lo que debemos hacer, como ya lo enseñó la histórica huelga de hambre de los fiscales en abril y mayo de 2008. Fortalecer la democracia hondureña requiere fortalecer la ciudadanía hondureña; no hay otra salida.

MINISTERIO PÚBLICO

El bipartidismo sigue sin aprender de la historia

El Congreso Nacional de Honduras eligió nuevo Fiscal General del Estado al liberal Luis Alberto Rubí, y como Fiscal General Adjunto al nacionalista Roy Urtecho, para un período de cinco años a partir del 9 de marzo próximo. De nuevo el bipartidismo escogió sin aprender de las lecciones históricas recientes.

El abogado Rubí fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) en gobiernos anteriores, avalado por el Partido Liberal. Mientras que Urtecho preside la asociación de magistrados y jueces del Poder Judicial y fue avalado por el Partido Nacional.

Esta elección repitió, por enésima vez, el tradicional reparto de los altos cargos del Estado entre los dos partidos mayoritarios a pesar de que los candidatos formaban parte de un listado de cinco nominados, propuestos por una comisión formada por representantes de otros entes estatales y gremios.

Sobre los nuevos funcionarios hay pocas expectativas. La herencia que deja el Fiscal Rosa Bautista y su Adjunto, Omar Cerna; es de una institución muy desacreditada, por dentro y por fuera.

De hecho, los motivos de la huelga de hambre iniciada el 7 de abril del 2008 por los fiscales Víctor Antonio Fernández Guzmán, Soraya Lizeth Morales Romero, Luis Javier Santos Cruz y Jari Dixon Herrera siguen vigentes.

Se exigió el ejercicio de acciones criminales contra personas vinculadas a las elites políticas y económicas autores de grandes actos de corrupción; el cesamiento de los procedimientos de despido y amenazas de rotaciones contra Fiscales; la no intervención en la Asociación de Fiscales de Honduras por parte de las autoridades del Ministerio Público, y la definición de un mecanismo para garantizar a los fiscales un salario justo y el ejercicio sin trabas ni riesgos para sus vidas con independencia y estabilidad.

Rubí y Urtecho conocen esos puntos y también conocen los antecedentes inmediatos del ex Fiscal Ovidio Navarro y de Rosa Bautista, saben que en la Constitución de la República y la Ley del Ministerio Público, se encuentran las normas legales aplicables para que el Congreso Nacional apruebe o impruebe la conducta del Fiscal General y del Adjunto, y en ese sentido están sujetos para que en cualquier momento puedan ser interpelados y de resultar que ha existido algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa en el desempeño de sus cargos, el Congreso Nacional, así como los nombró también legalmente los puede suspender o separar de sus cargos.

Ambos tienen una oportunidad histórica de contribuir realmente a la seguridad jurídica y social de Honduras; puede que la aprovechen o puede que no, pero también deben estar conscientes que hay una ciudadanía organizada que estará vigilando sus actuaciones. La huelga de hambre marcó, al respecto, un antes y un después. No hay vuelta atrás.

Centroamérica ¿Pretexto o contexto?

Con insistencia se escuchan en el país referencias de la situación de Honduras respecto a Centroamérica. Que tenemos los combustibles más baratos, que el aumento al salario mínimo es el mayor en la región, que los maestros hondureños tienen los mayores privilegios del istmo, que la leche y los huevos son los más baratos, que la tasa de crecimiento del PIB es la mayor de todas...en fin, que si esas aseveraciones tienen la credibilidad de aquella que "jugamos el mejor fútbol del área", entonces es mejor que nos agarren confesados.

Todo lo anterior motiva al FOSDEH publicar cómo está realmente Centroamérica y cuál es la ubicación de Honduras en ese contexto.

En población, Centroamérica es la quinta en América Latina con 37.4 millones (2005), superada – en orden ascendente – por Argentina (39.3), Colombia (42.3), México (106.1) y Brasil (181.6). De acuerdo con las proyecciones, en el 2010 será la cuarta en población, desplazando a Argentina, y sumará tres veces más que la población caribeña en su conjunto. (CELADE, 2002)

Si los indicadores dejan de ser "regionales" y se vuelven "nacionales" sus posiciones en el contexto latinoamericano (21 países, sin incluir el Caribe) se desploman. Guatemala (12.9 millones), la más poblada, ocuparía el lugar número nueve; Honduras (7.3), el 15; El Salvador (6.8), el 16; Nicaragua (5.7), el 17; y Costa Rica (4.4) el 18, Teniendo como referencia la población al 2005.

En todos sus indicadores económicos y sociales, a excepción de tasas de bienestar (educación, mortalidad infantil, mortalidad materna, y otros) de la sociedad costarricense, cada país centroamericano por sí mismo es débil y deficitario. Indicadores de mortalidad infantil (muertes por mil nacidos vivos) dan el siguiente panorama, comparado con el de otros países del continente: **Costa Rica, 9**; Chile, 10; Uruguay, 14; Argentina, 16; Colombia, 19; Panamá, 19; Venezuela, 19; Ecuador, 24; México, 24; Paraguay, 26; Perú, 30; Brasil, 31; **Honduras, 31**; **El Salvador, 33**; **Nicaragua, 36**; **Guatemala, 43**; y Bolivia, 60. (PNUD, 2003).

En el ingreso per cápita, por ejemplo, Honduras y Nicaragua son considerados los más pobres de América Latina, junto a Bolivia y Guayana. Si se toma en cuenta el indicador de la expectativa de vida, Guatemala (54.3 años) y Bolivia (53.3) son los peor ubicados del continente.

En conjunto, Centroamérica es por su ubicación geográfica y recursos naturales una región competitiva, sus dimensiones internas y externas varían y su peso internacional cambia, pero esa competitividad encuentra en la pobreza y desigualdades extremas su peor obstáculo de crecimiento.

En el mejor momento de la integración regional, la década de los 60, las economías de la región llegaron a crecer a un ritmo que las estadísticas muestran como superior al promedio latinoamericano: 4,9% hasta 1975 y 3,2% hasta 1979. (Centroamérica en cifras, FLACSO-IICA, 1990), pero los años que le sucedieron fueron de extrema violencia social y política, confirmando que el crecimiento económico no genera, por sí mismo, condiciones de equidad. Para el 2007 el crecimiento estimado fue de 8.6% y para el 2008, el crecimiento esperado era de 4.7%.

Lo que ha imperado oficialmente en la región es una defensa cerrada de intereses empresariales, financieros, agrícolas y políticos que provocan asimetrías evidentes al interior de cada país y en el conjunto del istmo. Un ejemplo: las tres principales economías de la región, es decir, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, en conjunto aportan 84% del Producto Interno Bruto centroamericano. Honduras y Nicaragua apenas 16%.

La aún fresca negociación (2005-2006) del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EEUU (CAFTA, por sus siglas en inglés) ratificó el poder de esos círculos económicos, financieros y políticos puesto que terminaron imponiendo sus intereses a los de

la mayoría de la población. Hoy varias de las voces defensoras del tratado admiten que no fue bien negociado, pero los responsables están tranquilos; sin que pese en sus conciencias las repercusiones humanas de miles de pequeños y medianos productores que resultaron perjudicados.

Un punto importante para entender la compleja realidad centroamericana es que un buen desempeño económico de la región no se traduce necesariamente en mejores índices de gobernabilidad, ni se garantiza su estabilidad y progresión. Uno de esos problemas estructurales no resueltos; el más importante de todos, es la pobreza, cuya magnitud afecta sensiblemente a la mayoría de los países. Con excepción de Costa Rica y Panamá, en la región se registran niveles de pobreza que oscilan entre 50% y 80% de las poblaciones, lo que resulta en un promedio de 56% de personas bajo la línea de pobreza en toda la población de América Central, porcentaje muy superior al promedio de América Latina.

Asociada a la pobreza está la desigualdad interna. Centroamérica reúne características de *elevada desigualdad* en el contexto de América Latina, ya que 10% más rico de los hogares recibe más de 35% del ingreso total (CEPAL). Reducir esas desigualdades y las inequidades formaba parte de los objetivos pactados en los acuerdos de paz que marcaron el fin del conflicto regional de los años 80 o están en el trasfondo de las Metas del Milenio o de la ERP en el caso de Honduras.

El balance histórico confirma que esos objetivos no se cumplieron. La situación regional evidencia enormes desafíos en los procesos de desarrollo. Encarar esos retos implica asumir objetivos comunes al interior de cada uno de los países y entre los países. Demanda establecer un nexo entre crecimiento económico y desarrollo. Un aspecto central en la caracterización de Centroamérica es su elevada dependencia de la economía y la política estadounidense. En ese escenario es que la economía centroamericana es vulnerable a ciclos de estabilidad, crecimiento o recesión de la economía estadounidense, como ocurre en la actualidad.

Sin duda, en la región el reto ciudadano es lograr que las estructuras socio-económicas oligopólicas abran paso a reformas de Estado imprescindibles para impactar en lo social. Ese es uno de los temas, por ejemplo, del actual proceso electoral en El Salvador que, 17 años después de firmados los acuerdos de paz en una ceremonia realizada en el Castillo de Chapultepec (México), presenta una de las desigualdades más altas del mundo en la distribución de la renta. El 20% más rico de la población recibe en promedio una renta 18 veces más alta que el 20% más pobre. El desempleo, la pobreza, la delincuencia y la extrema desigualdad son motivos que explican el incesante éxodo de salvadoreños (y hondureños) rumbo a Estados Unidos.

Con matices diferentes en Costa Rica, los países de la región se debaten en un terrible rezago social que no permite visualizar un crecimiento y desarrollo sólidos para el mediano y largo plazo. Lo social está quedando peligrosamente oculto en un proceso de democratización definido a partir de las prioridades económicas que imponen la globalización, los organismos internacionales de financiamiento y los grandes capitales.

Bajo ese contexto, urge que en los próximos años la agenda social centroamericana se ubique en un lugar sólido y preferencial de la acción estatal y privada, so pena de seguir acumulando problemas que darán al traste con cualquier esfuerzo de mejorar la economía y aún de alcanzar la estabilidad política que tampoco parece llegar a algunos países centroamericanos.

Lo social será la asignatura pendiente de los gobiernos y la clase política centroamericana mientras la mayoría de la población viva bajo la línea de la pobreza, con escasa escolaridad, deficiencias en los sistema de salud, hacinamiento y falta de viviendas, marginalidad social, delincuencia, inseguridad ciudadana y corrupción.

El agro hondureño: Cien tractores para un agro estancado



Los cien tractores donados al Estado hondureño por el gobierno venezolano de Hugo Chávez se agradecen, claro que sí; pero este hecho no debe ser sobredimensionado al grado de considerar que a partir de ellos el agro empezará a vivir mejores tiempos.

Bajo el modelo de ajuste hay territorios y actividades o rubros que entran en “desuso” a partir de que no forman parte de sus prioridades. Eso le ocurrió al agro hondureño a lo largo de la década de los 90.

Desde entonces, el agro enfrenta una situación de alto riesgo, por la creciente violación de los derechos humanos de que es víctima el campesinado. Frescos están aún los acontecimientos de Silín (Colón), el asesinato de activistas a favor del medio ambiente (como en el caso de Olancho), los desalojos violentos, la falta de aplicación del decreto 18-2008 y la proliferación de grupos armados ligados a los “dueños” de las tierras.

El panorama empeora al agregar los nuevos elementos que caracterizan el agro hondureño, entre ellos la presencia intimidante de bandas delincuenciales, como el narcotráfico, y que han penetrado diversas esferas de poder público y privado.

Cada narcotraficante se vuelve un terrateniente más ante la incapacidad institucional y social para detenerlo.

Ante esos y otros elementos, la conclusión más relevante es el fracaso rotundo, absoluto, de la Ley de Modernización del Desarrollo Agrícola y la condición de creciente empobrecimiento del campesinado, a quienes les piden producir para alimentar una sociedad que les da la espalda.

Más allá de los cien tractores, el asunto de fondo es reemplazar la Ley de Modernización del Desarrollo Agrícola y cambiarla no sólo por otra ley, sino por un modelo distinto.

El desafío no es comprobar si el Presidente Zelaya puede manejar un tractor; sino conducir una reforma a fondo del agro nacional. El debate urge si se toma en cuenta que el 2009 es el último año de gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales y que todo hace pensar que el próximo gobernante, quienquiera que resulte, será más represivo aún para el campesinado.

Las ofertas electorales hablan de llevar la maquila al agro, con lo cual no sólo condenan al campesinado a volverse mano de obra barata, sino que eliminan cualquier posibilidad de un enfoque social de la tierra.

Ante esa perspectiva ¿avanzarán los campesinos hacia una alianza estratégica que ponga de nuevo a discusión la reforma agraria y la planificación de la producción o seguirán dispersos, fragmentados y débiles?

La voluntad del Presidente Zelaya hay que ponerla a prueba con una decisión concreta, de alto valor simbólico: derogar por fin la Ley de Modernización del Sector Agrícola que Callejas impuso en el agro en 1992. Después de ello se podrá hablar de otras cosas.